

El “progresismo posneoliberal” en la estrategia del capital para América Latina

The “post-neoliberal progressiveness” in capital’s strategy for Latin America

Beatriz Stolowicz

A los gobiernos de izquierda y centroizquierda se les ha denominado genéricamente como “posneoliberales” y “progresistas”. Pero, en América Latina, el “progresismo posneoliberal” es el programa de los dominantes para estabilizar la nueva fase de reestructuración capitalista, para neutralizar conflictos y construir una nueva hegemonía burguesa, que ha sido elaborado desde hace más de 20 años. Sobre todo desde la crisis capitalista de 2007, tomada como “oportunidad”, sus políticas se ejecutan en todos los países, tanto donde gobierna la derecha como donde gobiernan la izquierda y el centroizquierda. La mayor influencia la ha tenido en Brasil. Y en buena medida explica la crisis de identidad y crisis política de la izquierda en América Latina.

Palabras clave: reestructuración capitalista, estabilización, posneoliberalismo, progresismo, centroderecha, crisis política, izquierda.

In a generalized way, the left and center-left governments have been called “post-neoliberal” and “progressive”. But, in Latin America, the “Progressive post-neoliberalism” is the two decades long ruling class project to stabilize the capitalist restructuring new stage, for neutralizing conflicts and constructing a new ideological hegemony. Taking particular advantage of the 2007 crisis as an “opportunity”, its policies have been executed at every country, both by the right-wing governments, as well the left or center-left ones in different degrees. It managed to have the largest influence on Brazil. To a large extent, that explains the Latin American Left is through an identity and political crisis.

Key words: capitalist restructuring, stabilization, post-neoliberalism, progressiveness, center right, political crisis, left.

Fecha de recepción: 31/01/2018

Fecha del dictamen: 07/05/2018

Fecha de aprobación: 11/05/2018

INTRODUCCIÓN

El cambio de coyuntura política tomó por sorpresa al llamado pensamiento crítico latinoamericano, que está pagando tributo por los equívocos analíticos sedimentados en más de 20 años. El debate que se desplegó en los últimos años en torno al “fin del ciclo progresista”, tras las derrotas electorales y crisis políticas que desde diciembre de 2015 se suceden en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, y más recientemente en El Salvador y Uruguay, simultáneas a la crisis venezolana, sintetiza en buena medida las dificultades explicativas.

La idea misma de “ciclo”, que alude a la pérdida de apoyo político y electoral a esos gobiernos en el contexto en que la crisis capitalista impacta al modelo neodesarrollista basado en exportaciones del sector primario, no permite clarificar las especificidades y orígenes de las tensiones y contradicciones políticas en cada país, ni sus posibles derroteros.

Al mismo tiempo, el uso del *adjetivo* “progresista” generalizó una caracterización de suyo ambigua. Desde antes de esta coyuntura de crisis político-electoral hubo distintos ejercicios taxonómicos, que hacían eje en distintos aspectos. Con la aceptación tácita de que se había producido “un cambio de época posneoliberal”, unos priorizaron las posturas geopolíticas frente al gobierno de Estados Unidos; otros, las declaraciones gubernamentales con críticas al capitalismo. A las posturas más “moderadas” se les calificó entonces como “progresistas”. Después se generalizó la adjetivación de *progresistas* a todos los gobiernos para distinguirlos de las fuerzas *conservadoras* que venían cosechando éxitos electorales. Y algunos asumieron que del “cambio de época posneoliberal” se “vuelve al neoliberalismo”.

Más allá de aquellos y otros criterios taxonómicos, se asumió que “posneoliberalismo” y “progresismo” eran señas de identidad del programa *alternativo* consustancial a las diversas expresiones de la izquierda latinoamericana. Ello, pese a las (inútiles) advertencias que desde hace varios años hacemos –bastante antes de la nueva coyuntura política–¹ sobre el error de usar el término “posneoliberalismo” para denominar proyectos realmente alternativos, porque desde hace 20 años había sido acuñado por los intelectuales y los operadores políticos sistémicos para denominar la fase de estabilización de la reestructuración capitalista, que incluía su caracterización política como “progresista”. Tiempo después se advirtió que la adopción de esos mismos términos por parte de la izquierda quizá no fuera imputable solamente a una escasa

¹ Desde 2007 formulo esas críticas en varios trabajos, algunos de los cuales están recogidos en mi libro *A contracorriente de la hegemonía conservadora* (2012).

imaginación lingüística, sino a la influencia efectiva –en grados distintos– de la estrategia dominante en su accionar.

Podrían encontrarse aquí algunas pistas explicativas de porqué se ha gestado una nueva hegemonía burguesa pese a la brutalidad de este capitalismo depredador. Que indica que la operación ideológica de los intelectuales sistémicos ha hecho mella incluso entre quienes se consideran críticos (lo que es una expresión de la hegemonía). Y que se manifiesta en la gestación de renovados consensos activos y pasivos entre sectores populares y medios que vuelven a dar apoyo electoral a la derecha. Ello, no obstante el cúmulo de acciones positivas que pueden reconocérseles a los gobiernos.

EQUÍVOCOS EN EL SABER CONVENCIONAL CRÍTICO

Los éxitos de la ofensiva ideológica de los dominantes no pueden ser explicados sólo por defecciones o traiciones de sus opositores genuinos. Ese es el expediente más fácil para usar en un debate político.

Entre los muchos factores que deben contemplarse para explicar la renovación de la hegemonía burguesa, habría que preguntarse hasta qué punto el llamado pensamiento crítico realmente lo es. Porque pensamiento crítico no es sólo *oponerse* a lo existente y abundar sobre el *deber ser*, sino la capacidad de develar lo encubierto en el funcionamiento del sistema y su reproducción. Esto remite a problemas epistemológicos y teóricos. Y, en ese campo, es menester reconocer que hay un conjunto de equívocos que facilitaron la eficacia de la retórica de los dominantes, quienes hicieron uso intenso del nominalismo usando algunas “palabras clave” caras al lenguaje de izquierda, del que se apropiaron. Uno de los orígenes de los equívocos en el saber convencional crítico remonta a cómo se ha pensado la reestructuración capitalista en América Latina: la asumió como *la época de imposición* del neoliberalismo. Se tomó como realidad lo que sólo era el discurso de los dominantes, que presentaron retóricamente al “neoliberalismo” como una política económica –el ajuste recesivo monetarista–, como “Estado mínimo” y como desatención por lo social. Pero no lo pensaban ni lo ejecutaron así. La reestructuración capitalista, *cuyo objetivo es la restauración del poder ilimitado del capital y sus ganancias*, fue concebida desde comienzos de la década de 1970, antes del golpe de Estado en Chile, como una estrategia de largo plazo con fases diferentes, con distintos instrumentos y, sobre todo, con una gran flexibilidad táctica.²

² El estudio de la estrategia de reestructuración capitalista con sus distintas fases, de los diferentes instrumentos y cambios tácticos, de los actores ejecutantes y de la retórica con que se lleva a cabo,

Una primera fase de *demolición* de las conquistas de los trabajadores y de su institucionalización como derechos, en algunos países requería violencia extrema. La estrategia ya contemplaba una siguiente fase de *estabilización* con cambio del régimen político y un gobierno de coalición. En términos económicos, contemplaba etapas de duración cambiante: una primera antiinflacionaria, otra de “reformas estructurales” aperturistas y liberalizadoras –poniendo a su servicio la privatización de empresas públicas–, y otra de retoma del crecimiento. El neoliberalismo nunca fue como lo caracterizaron sus exégetas, ni siquiera en los años de la dictadura de Pinochet: nunca fue Estado mínimo, ni fue pensado así, sino Estado máximo al servicio del capital; se ejecutó con distintas políticas económicas, y se implementaron algunas políticas sociales focalizadas. Más aún, en 1975 Milton Friedman le recomendaba a Pinochet que además del control de la inflación como objetivo urgente, atendiera la situación de los más desfavorecidos por el ajuste, y que desarrollara una “sana economía social de mercado” (Stolowicz, 2016:85).

El equívoco de haber tomado como realidad aquellas tres características presentadas retóricamente por los dominantes hizo posible que los cambios de instrumentos y etapas fueran presentados como “superación” del “neoliberalismo”; que cada cambio táctico pudiera presentarse como “alternativa”. Y que la fase de estabilización, tras la época de imposición como demolición, pudiera ser presentada como *otra época*.

La estrategia de dos fases sucesivas, tal como se concibió originalmente, se cumplió en Chile donde la demolición fue más prolongada y más acabada. En otros países, la demolición y la estabilización se superpusieron, y también los respectivos discursos, tal como ocurrió en México, Colombia y Brasil. La investigación mostró, además, que la profundización de la reestructuración capitalista se ejecutó con varios momentos de demolición-estabilización, utilizando a las crisis como “oportunidad”. Esto es fundamental para pensar la coyuntura actual.

En el diseño de la estrategia, para la estabilización se asigna una funcionalidad diferenciada a los subsistemas de la dominación según las cambiantes circunstancias sociopolíticas. Se asume que el nuevo régimen representativo dará un tiempo de estabilidad, porque la pedagogía de la represión generó (y genera) “un consenso moderado”. Pero se preveía que sería temporal, y por eso se planteaba la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reconfiguración de la sociedad para garantizar la gobernabilidad. Lejos de la retórica del individualismo, se promueven formas de microcorporativismo social, con el apoyo práctico e intelectual de la Iglesia y otros

ampliamente documentado, se encuentra en mi libro *El misterio del posneoliberalismo*, tomo II, *La estrategia para América Latina* (2016), al que remito para consultar las fuentes de lo que aquí se afirma.

“agentes” de la “sociedad civil”, desplegando el discurso de la “solidaridad”. La reconfiguración de la sociedad es uno de los cometidos fundamentales asignados al Estado. Por ser un proceso lento, se plantea que es necesario acompañarlo con el fortalecimiento de un orden jurídico que dé seguridades al capital, y se le asignan mayores funciones políticas al poder judicial.

Las raíces doctrinarias de este proyecto están en el ordoliberalismo alemán de la década de 1930, al que estaba vinculado Hayek; que impulsó la renovación del liberalismo en la Sociedad Mont Pélerin; y dio programa a la Democracia Cristiana alemana en la segunda posguerra como economía social de mercado. El programa va adaptándose a las condiciones de América Latina desde la década de 1960; influye sobre el pensamiento cepalino en la década de 1980; y tiene como principal operador político a la democracia cristiana latinoamericana, con sus históricos vasos comunicantes con los partidos miembros de la Internacional Socialista. Durante la década de 1990, el gobierno de la Concertación de Chile, encabezado por la Democracia Cristiana, se erige como el modelo para la región.

CAMBIO TÁCTICO A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990

En los primeros años de la década de 1990, los cambios *de* regímenes políticos tras las dictaduras, o cambios *en* los regímenes políticos (como con la Constituyente de Colombia en 1991), dieron un margen de gobernabilidad integrando al sistema representativo a los otrora perseguidos. Esta fue la primera operación de “modernización de la izquierda” para su corrimiento al “centro”, explotando los impactos ideológicos de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre importantes sectores. Los rigurosos efectos en desempleo y empobrecimiento de las políticas anti-inflacionarias, aperturistas, liberalizadoras y privatizadoras impuestas en ese contexto político no tuvieron respuestas de magnitud equivalente en la mayoría de los países, no sólo porque las organizaciones sociales habían sido debilitadas con esas políticas, sino también porque la pedagogía de la represión hizo que se privilegiara la libertad sobre la igualdad. Parecía que ya se habían absorbido las consecuencias del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y de la brutal represión en el Caracazo en 1989.

Pero el tiempo de gracia de la conservadora democracia gobernable³ se fue agotando rápidamente. A mediados de la década de 1990 —en el contexto de las crisis finan-

³ La conceptualización que esta autora hizo de la *democracia gobernable*, y sus prácticas, puede observarse en varios trabajos, algunos de los cuales están recogidos en Stolowicz (2012).

cieras de México, Brasil y Argentina de 1995, y la asiática de 1997– se observaba una recomposición de luchas sociales en toda la región, con especial protagonismo de movimientos indígenas, magisteriales, estudiantiles y de empleados públicos. En los círculos oficiales se admitía que crecía el “desencanto” con la democracia y con los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo que las primeras experiencias de gobiernos municipales de izquierda en capitales nacionales y de estados en Brasil, Uruguay y Venezuela, desde comienzos de la década, ganaban reconocimiento por la eficacia de su gestión y su vocación democrática; a los que se sumaron en 1997 gobiernos en las capitales y otros municipios de México y El Salvador.

Los intelectuales y operadores políticos de la reestructuración capitalista respondieron con prontitud a la nueva coyuntura de crisis de gobernabilidad, asumieron la necesidad de cambios tácticos y discursivos, y desplegaron nuevos instrumentos en todos los frentes.

Para neutralizar la conflictividad social existente, y potencial, expandieron las acciones sobre el subsistema social, con distintas tácticas en la búsqueda de control, y nuevas instituciones públicas para esos cometidos. De una parte, para crear nuevas bases clientelares se ejecutaron focalizadas “políticas sociales de atención a la pobreza”, financiadas por el Estado, pero la provisión de los servicios fue entregada a privados, que obtuvieron ingentes ganancias. Estas políticas se desplegaron con la asistencia de “agentes de la sociedad civil”, bajo el discurso de “lo público no estatal”, dando trabajo a un buen número de profesionales y ampliando el consentimiento en esos sectores de clase media. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha diversas acciones de disolución-represión contra organizaciones sindicales activas, sobre todo en el sector educativo en sus tres niveles y de otros empleados públicos, mediante “reformas” educativas y de la función pública con lógicas meritocráticas y empresariales. El concomitante aumento del “gasto público social”, que fue financiado con mayor recaudación mediante impuestos indirectos altamente regresivos, era presentado como prueba de que se estaban “abandonando las restricciones monetaristas neoliberales”.

En el subsistema económico, los instrumentos se centraron en proteger al sistema financiero de sí mismo: con rescates financieros con recursos públicos; ampliación de sus mercados con reformas a los sistemas de seguridad social y la creación de fondos de pensiones y seguros privados; así como nuevas normativas para darle seguridad y expansión, que era regulación para la autorregulación pero se presentaba como el abandono del (nunca existente) *laissez faire* neoliberal. Como medida preventiva contra el riesgo de que cobraran fuerza las posturas opuestas a la apertura económica, se desplegó un abanico de acciones para retener y atraer nuevo capital trasnacional: reformas legales y judiciales para dar seguridad expedita a los derechos de propiedad;

intenso uso del derecho internacional público en tratados y acuerdos de toda índole para que funcionaran como “amarres de salida” (que fuera más costoso salirse que quedarse en ellos), etcétera.

A este gran activismo estatal para dar estabilidad al capital y expandir sus ganancias con esas “reformas de segunda generación” –nueva fase de la reestructuración capitalista tomando como “oportunidad” la crisis– se le construyó un halo de justificación teórica en el *neoinstitucionalismo*, que se convirtió en el *mainstream* académico del “posneoliberalismo”.

Pero había un grave problema sin resolver: los gobiernos nacionales que estaban ejecutando todas esas políticas no dejaban de ser vistos como neoliberales, y a sus partidos como de derecha o, en el mejor de los casos, de centroderecha. Era necesario construir un sujeto político “posneoliberal” creíble. Que fuera capaz de bloquear política y electoralmente la emergencia de “reacciones populistas de viejo cuño” a los ostensibles “fracasos de las reformas económicas”.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA “ALTERNATIVA PROGRESISTA”

Las discusiones actuales sobre el “fin de ciclo” serían menos erráticas si se entendiera que *progresista no es un adjetivo, sino un sustantivo*: se trata de un programa muy concreto para legitimar social y políticamente la estabilización y profundización de los objetivos del capital, en contextos de más frecuentes crisis, y para neutralizar las posturas anticapitalistas en los partidos de izquierda o a la izquierda del espectro político.

En 1996 y 1997 se realizaron varias reuniones para discutir el programa y sus justificaciones (tres en México, una en Costa Rica, otra en Buenos Aires). Fueron convocadas por el mexicano Jorge G. Castañeda Gutman y el brasileño-estadounidense Roberto Mangabeira Unger, ambos gestores del “partido transversal”⁴ en sus países. El núcleo duro de elaboración estaba integrado por políticos y académicos mexicanos,

⁴ La idea del “partido transversal” fue acuñada por Enrique Correa, poderoso operador de la Concertación de Chile, ex MAPU, ex socialista, ex ministro general de la Presidencia de Patricio Aylwin (1990 y 1994), director de Flacso desde 1997, multiempresario. En 1996 decía que “[...] cada día es más evidente que no existen grandes diferencias entre los partidos políticos, y en cambio, son mayores y más evidentes los grados de identidad y de consenso en torno a los grandes temas [...] La cultura del transversalismo debe ser institucionalizada en un partido federado que represente la cultura de centroizquierda [...] e integre al centroderecha” (1996:4).

chilenos, brasileños y argentinos. Formaban parte del grupo, además, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, entre otros.

En noviembre de 1997, en la reunión realizada en Buenos Aires, se hizo público el documento programático que el grupo venía discutiendo, con el título *Alternativa Latinoamericana. Un nuevo camino después del neoliberalismo*. Fue publicado en una separata especial de *Página/12* del martes 2 de diciembre de 1997, en la que se le bautizó como “Consenso de Buenos Aires”. El documento comienza diciendo:

La motivación compartida del grupo que se ha venido reuniendo es la búsqueda del paradigma perdido. Conscientes de que tanto el fundamentalismo de mercado imperante como el desarrollismo protegido y populista de antaño resultan hoy inoperantes, que propuestas puntuales limitadas a ámbitos estrechos y circunscritos –el económico, el político, el social o el internacional– no bastan para diseñar un programa de reforma y de gobierno viable, creíble y diferente, y que de poco sirve erigir plataformas y lanzar proclamas sin las coaliciones políticas y sociales que las impulsen [...] se ha trabajado con paciencia, con un horizonte de largo plazo y sin la premura de crear consensos artificiales y efímeros.⁵

El diagnóstico recorre los temas de la desigualdad y la escisión de las sociedades, la injusticia; la insuficiencia de los gastos en políticas sociales que no compensan “los interminables decenios perdidos”; las amenazas sobre las incipientes democracias con conatos de golpes y magros resultados económicos que “explican la apatía de una población agobiada por la sobrevivencia”. Se afirma “que se han estrechado los márgenes de maniobra de cada nación, gobierno, partido o movimiento”, pero que se han entreabierto “nuevas posibilidades de cambio” con las tecnologías, con el fin de la guerra fría, con los avances de la integración regional y con “la posibilidad de despojar a los intentos de reforma social de sus connotaciones ideológicas decimonónicas”. Es decir: contra resabios socialdemócratas clásicos que defienden los derechos colectivos de los asalariados.

El programa consta de quince puntos, que es el mismo que impulsan los “posneoliberales” en los distintos conciliábulos, pero con una retórica “progresista” alambicada, sin duda agradable para los oídos de la izquierda antineoliberal. El texto concluye diciendo que: “Nos queda por delante una larga travesía; gran parte de la misma sólo podrá andarse sobre la marcha [y] no pasará la prueba de fuego hasta que el incipiente encuentro de ideas y de fuerzas se plasme en una coalición de apoyo, un

⁵ Véase análisis de este documento y de los debates que lo antecedieron en Stolowicz (2016:779-823).

triunfo electoral, y en un programa de gobierno”. A 20 años de distancia, resulta suficientemente expresivo registrar cuáles eran los prospectos para encabezar los gobiernos que ejecutarían ese programa, que *Página/12* calificó como “protagonistas decisivos”, los “presidenciables”: Vicente Fox (México), Ricardo Lagos (Chile), Ciro Gomes (Brasil), Facundo Guardado (El Salvador) y Carlos *Chacho* Álvarez (Argentina). De ellos, los que sí alcanzaron la presidencia fueron Vicente Fox y Ricardo Lagos en el año 2000. Chacho Álvarez ocupó la vicepresidencia en el gobierno de la Alianza presidido por Fernando de la Rúa, de la que renunció a escasas semanas de que el presidente huyera de la Casa Rosada en un helicóptero, en medio del levantamiento social de finales de diciembre de 2001.

Más expresivo, quizá, es que el documento programático más acabado de la “Alternativa Progresista” fue presentado un año después, en enero de 1999, conjuntamente por Roberto Mangabeira Unger y Carlos Salinas de Gortari, en su texto en coautoría “The Market Turn Without Neoliberalism” publicado por la revista estadounidense *Challenge*, y reproducido en México por el diario *Reforma* con el título “Hacia un mercado sin neoliberalismo”. En líneas generales, este texto contiene la temática expuesta insistentemente por Mangabeira a nombre propio o como documento de consensos políticos, pero afina la argumentación económica y, sobre todo, presenta una sistematización de lo que en las elaboraciones de la época aparecía como “políticas” desarticuladas o en simple yuxtaposición.

PROGRESISMO COMO “INCLUSIÓN AL MERCADO”

El documento de estos dos amigos en Harvard se publica en el momento álgido de la crisis financiera mundial, un contexto distinto de cuando se publicó el del “Consenso de Buenos Aires”. Una crisis que en el trasfondo expresa una crisis de sobreproducción y de capitales en riesgo de desvalorización, que necesita articular el capital dinerario excedente con los ciclos de acumulación: absorción productiva de capitales en inversiones de retorno seguro aunque más lento, como los de infraestructura y otras formas “productivas” que implican el control territorial para el saqueo de recursos naturales o bienes comunes; ampliar los mercados para potenciar las ganancias articuladas de los grandes capitales transnacionales y de origen criollo o *translatinos*.

El llamado a preservar a las economías “nacionales” de la volatilidad financiera mediante el aumento del ahorro interno, con que comienza el texto de Salinas-Mangabeira, era planteado por los otros *posneoliberales*, que definieron al neoliberalismo sólo como liberalización financiera. Lo mismo puede decirse del llamado del

documento a dar un énfasis “productivista” al “estilo de desarrollo exportador”, para el cual se convoca a “movilizar recursos nacionales”; o el llamado a “conectar las finanzas con la economía real”, que otros *posneoliberales* como el colombiano José Antonio Ocampo o el chileno Ricardo Ffrench-Davies promovían a nombre de un “nuevo desarrollo”. Lo singular de este documento es su potente retórica, que construye justificaciones como si se tratara de críticas.

“A los supuestos progresistas de hoy les falta un programa”. El suyo, la *verdadera alternativa progresista*, tiene un destinatario: es “una propuesta que convoca tanto a los escépticos como a los esperanzados, y tanto a los radicales del centro como a los herejes de la izquierda”.

El punto de partida de la construcción discursiva es el rechazo a la “forma neoliberal” de hacer una economía de mercado, porque es “excluyente y elitista”, que “priva a la mayoría de la población de los beneficios del mercado, que sólo enriquece a los menos”. La “alternativa incluyente” no consiste en “humanizar lo existente con algunas compensaciones”. Tampoco es el programa de la socialdemocracia de “instituciones rígidas y derechos sociales establecidos”, “incrustados”, que dividen a la población entre “incluidos” y “excluidos”. El programa progresista es una “revolución de mercado”, distinta a la neoliberal, para que los “beneficios les lleguen a los más y no sólo a una minoría”. En su argumento, “minoría” no son sólo los ricos, sino también los incluidos en derechos consagrados. Esta alternativa “no es un simple intento de yuxtaponer el legado del Estado de bienestar a los mecanismos conocidos de la flexibilidad económica. Es un programa tanto productivista como distributivista. Busca anclar sus compromisos sociales a las rutinas diarias de la vida económica”. Distributivista –aclaran– “no significa la ampliación de derechos establecidos”, sino “dotación de equipamiento económico y cultural para todos”, de “activos”, para ser “efectivamente ciudadanos y trabajadores”. La alternativa progresista es social-liberal.

La apuesta productivista es presentada para alcanzar un loable “pleno empleo con crecimiento sustentable y no inflacionario”. Argumentan que la inversión productiva es débil porque se hace en buena medida con ganancias retenidas, y como “los dueños y administradores del negocio productivo no son un cuerpo de funcionarios sociales dedicados a proveer la mayor satisfacción posible a los consumidores. Su meta es hacer dinero [...] que pueden obtener en la especulación”, pues entonces hay que financiarles su inversión. La solución no requiere “que los gobiernos nacionales se arrodillen ante las finanzas internacionales” como “los neoliberales que hacen énfasis en disciplinar el gasto público y son muy confiados en el uso de capital externo para compensar las caídas en el ahorro nacional”. Con ese tono nacionalista fundamentan la reforma al sistema bancario y de valores para que “las instituciones financieras locales y las cooperativas

inviertan en nuevos negocios”, y “los fondos de pensiones actúen como capitalistas de riesgo y como financistas de rescate, con riesgos mancomunados y de ser posible con fianzas”. Plantean que el “esquema de organización pública de ahorro privado forzoso, obligatorio, tal como el ahorro para el retiro [...] debería ser rigurosamente proporcional al ingreso personal. Podría complementarse con una acción inversa en los niveles más bajos de la escala de ingresos: garantizar un mínimo ingreso a los que no pueden trabajar y complementar los salarios más bajos de los que trabajan” [transferencias monetarias focalizadas –solidaridad– para convertirlos en ahorradores privados].

Lo característicamente “progresista” del programa estaría en cómo resolver la “desigualdad y la exclusión”, cuya “mayor causa” es “la división entre la vanguardia moderna y la retaguardia atrasada en la economía”. Si la mayoría de la población está en la retaguardia productiva, “no hay asistencia social basada en las técnicas convencionales de impuestos y transferencias que sea suficiente para asegurar mayores igualdad e inclusión”. El asistencialismo focalizado puede ser necesario en algunos casos, pero el eje del programa “incluyente” está en que el mercado proporcione las herramientas a la retaguardia para “que pueda salir adelante por sí misma emprendiendo innovaciones”. En esto pensaba Mangabeira cuando hablaba de una “emergente clase media innovadora y de autoayuda”.

Este es el campo en el que debe intervenir ampliamente el Estado “para generalizar las prácticas vanguardistas en la economía como un todo”, conectando a las pequeñas y medianas empresas de retaguardia a fondos de financiamiento y asistencia técnica, pudiendo conformar con éstos una “constelación de negocios” con “muchas y variadas formas de propiedad, privada, social y no gubernamental”. Este discurso sobre el emprendedurismo innovador de la retaguardia envuelve el objetivo de subordinarla como satélite de la gran empresa para abaratarle costos mediante la tercerización.

Para que el Estado despliegue esas funciones e instituciones, los progresistas rechazan la política neoliberal de impuestos bajos y redes de protección social, y en cambio plantean aumentar la recaudación con impuestos al consumo [tasas hasta de 30%], “lo que puede aliviar los extremos de inseguridad económica; porque la escasa recaudación y la disciplina fiscal sólo permiten modestos y selectivos derechos”. Tampoco aceptan la lógica “socialdemócrata de impuestos sobre los ingresos rigurosamente proporcionales” pues “será imposible tener recursos para financiar generosos y amplios derechos sociales”. También las comunidades pueden organizarse para proveer varios de ellos reduciendo sus costos, dicen inspirados en el Pronasol de Salinas.

Develando la retórica del *nuevo bien-estar progresista*, por “derechos sociales” debe entenderse el acceso mediante “activos” al consumo de “servicios”. La “inclusión al mercado” es el sustrato de una *ciudadanía patrimonial*.

Los autores aclaran que su propuesta “indica la dirección pero no ofrece un diseño exacto de sus acciones”. En efecto, en ese momento no eran visibles todas las formas que adoptarían. No obstante, su sistematización exhibe la centralidad del objetivo: financiar la acumulación de capital del “desarrollo productivo” con el fondo de consumo de los que viven de su trabajo actual y pasado, formal o informal. El medio es multiplicar las funciones del Estado que garanticen esa transferencia. Con el *plus* político de generar un consentimiento satisfecho entre los nuevos *incluidos*.

A finales de la década de 1990 ya se reformaban los sistemas de seguridad social y pensiones. La crisis capitalista de 2007 da la “oportunidad” para imponer las otras acciones de “inclusión” que configuran cambios cualitativos en las modalidades de reproducción del capital. Mucho más sofisticados en sus instrumentos y retórica, y en su eficacia para construir consensos activos y pasivos que renuevan la hegemonía burguesa. Sin la mirada sobre la estrategia total es difícil aprehender la funcionalidad de cada uno de sus instrumentos y sus conexiones.

Tan sólo para mencionarlos, están los llamados “negocios inclusivos”, que encadenan a los pequeños productores, especialmente los agrarios, a las transnacionales; las que, sin afectar la pequeña propiedad de la tierra, se apropian de su renta agraria; completan la subsunción real al capital de la pequeña producción campesina; y convierten a esos campesinos en jornaleros de facto del gran capital, aunque se piensen como *socios*.

Está la llamada “inclusión financiera” que consume, en una extensión inimaginable tiempo atrás, la subordinación forzosa de todos los que viven de su trabajo al capital financiero, con el uso de su fondo de consumo como fondo de acumulación y ganancias, con varias formas. La clásica del cobro de interés usurero por microcréditos como “activos para el consumo” de bienes y servicios. La venta de microseguros como “activos para la seguridad” (salud, desempleo, vejez). Y la más novedosa es la bancarización forzosa de los ingresos por salarios, jubilaciones, pensiones y transferencias monetarias gubernamentales de las políticas sociales, que pasan al fondo de acumulación del capital antes de ser propiamente fondo de consumo en manos de sus propietarios y, por lo tanto, tampoco es ahorro en sentido estricto. Esto no estaba contemplado en los análisis de los clásicos: además de valorizarse con el plusvalor, que es expropiado, el capital se valoriza con el valor de la fuerza de trabajo (actual y pasado) mediante su desposesión temporal, y recién después lo devuelve como fondo de consumo. Además, con ese valor desposeído temporalmente –por el que el banco no les paga la tasa activa de interés en calidad de acreedores o alícuotas de ganancias en calidad de inversores–, a sus propietarios les venden créditos por los que les cobran intereses. Significativo es que el Estado, además de imponer coercitivamente todas estas formas de subordinación al capital financiero como si fueran “políticas sociales de inclusión”, le financia al capital los costos de operación.

También se imponen las asociaciones público-privadas financiadas con los presupuestos públicos, que transfieren fondo de consumo mediante impuestos a la acumulación de capital (que sólo los asalariados y consumidores pobres pagan, porque son los únicos que no deducen). Todo ello mediante una legislación que convierte el patrimonialismo estatal en Estado de derecho (Stolowicz, 2016:903-1108).

Debe decirse que estas nuevas formas de reproducción capitalista se están ejecutando en todos los países. Las listas de clasificación sistémicas colocan a Brasil, México, Colombia, Chile y Perú a la vanguardia. En algunos países gobernados por la izquierda y el centroizquierda se han introducido una que otra restricción en su aplicación, pero se ejecutan. Y en Venezuela, que no estaba en la órbita de esta estrategia, en los últimos meses de aguda crisis económica comienza su implementación.

HACIA UN “NUEVO PROGRESISMO”

En la primera década de este siglo, la estrategia política tuvo sus avatares porque el desempeño de los gobernantes de ese “centro posneoliberal” fue denunciado rápidamente como neoliberal. Con esa imagen terminan Ricardo Lagos su presidencia (2000-2006) y el segundo periodo de Fernando Henrique Cardoso, en Brasil (1998-2002). El plan había funcionado para hacer ganar la presidencia a Vicente Fox. Mangabeira Unger era su asesor desde que había sido gobernador de Guanajuato. Con el apoyo del *partido transversal* construido desde 1994 en el Grupo San Ángel, en una alianza tácita del Partido de la Revolución Democrática, con el Partido Acción Nacional, de Fox, se promovió el llamado voto útil. Jorge Castañeda, coordinador internacional de su campaña, fue designado su canciller. El aura épica del candidato de discurso posneoliberal, y del presidente electo por “sacar al PRI de Los Pinos”, se esfumó rápidamente con su “gobierno de empresarios y para empresarios”, su clericalismo conservador y su talante represivo. ¿Tragedia repetida como farsa?⁶

⁶ El PRI es nuevamente gobierno. En la campaña electoral de este 2018, la alianza entre el PRD y el PAN es formal en la Coalición Por México al Frente. El candidato presidencial es el panista Ricardo Anaya. Jorge Castañeda Gutman es su coordinador de campaña y promoverá el voto útil (*La Jornada*, México, 22 de marzo de 2018, p. 14). El panista viajó a Chile para conversar con Ricardo Lagos y Eduardo Frei, para “reproducir en México la experiencia de la Concertación chilena” (*La Jornada*, México, 17 de marzo de 2018, p. 7), que volvió a ser derrotada por Sebastián Piñera, quien había asumido la presidencia una semana antes de su viaje.

Un nuevo escenario de movilizaciones sociales *contra el neoliberalismo* atravesaba el continente: la *guerra del agua* en Bolivia en el 2000, que revirtió las concesiones; el levantamiento popular argentino en 2001 con la renuncia del presidente; las movilizaciones por la aguda crisis económica en Uruguay en 2002; la derrota del golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 por una amplia movilización social que saludó la radicalización de las acciones gubernamentales. Se reanimaron la autoestima de la izquierda “radical” (anticapitalista) y el debate político e intelectual.

El “centro” había fracasado en su papel estabilizador. Quizá había llegado la hora de permitir la llegada al gobierno de las fuerzas de izquierda que eran reconocidas como genuinas antineoliberales, porque devolverían cierta épica y *glamour* a la política. Para ello, era imperioso minar a la izquierda anticapitalista para que adoptara el programa “progresista” como *el único posible y viable*.

En los conciliábulos sistémicos, como el Diálogo Interamericano, se pensaba que Brasil debía desempeñar un papel estabilizador en la región. Se concedía que el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva podría operar como una válvula de escape para la ingobernabilidad; sobre todo después de su *Carta al pueblo brasileño* del 22 de junio de 2002 en la que comprometió continuidad con la política estabilizadora y respeto a los contratos y obligaciones del país. El grupo de la Alternativa Progresista hizo la misma apuesta.⁷

Para Jorge Castañeda y Mangabeira Unger, “el problema no era Lula, sino el PT”. Desde 1994, Mangabeira criticaba que el Partido dos Trabalhadores (PT) tenía una orientación “corporativa” –orientada a las organizaciones sociales más clasistas– que le impedía llegar a ese sector desorganizado y mayoritario en el que está la “emergente clase media innovadora y de autoayuda”; y que a esa orientación corporativa el PT le sumaba una orientación “asistencialista” que no apuntaba a “democratizar el mercado”.

En la primera vuelta electoral de octubre de 2002, Mangabeira Unger –cofundador del Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), posteriormente miembro del Partido Democrático dos Trabalhadores (PDT), del Partido Popular Socialista (PPS) y de otros más– era asesor de Ciro Gomes como candidato presidencial del Frente Trabalhista (PDT y PTB). En la segunda vuelta de noviembre de 2002, Mangabeira le dio apoyo a Lula da Silva, al igual que lo hizo Ciro Gomes. En 2007, en la segunda presidencia de Lula, Mangabeira es designado como ministro de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, cargo al que renunció en 2009. En la segunda vuelta de noviembre

⁷ Lula da Silva había participado en las reuniones de ambos espacios. Véase Stollowicz (2016:752-754) caps. 13 y 23.

de 2014, Mangabeira da apoya a la reelección de Dilma Rousseff, quien en febrero de 2015 lo designa ministro de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, cargo al que volvió a renunciar en septiembre de 2015. Ciro Gomes —que fue miembro del derechista Partido Democrático Social, del PMDB, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), del PPS y de otros partidos, gobernador de Ceará y ministro de Hacienda de Itamar Franco— fue designado por Lula, en su primera presidencia, como ministro de Integración Nacional (2003-2006). Actualmente su nombre es contemplado como una “opción B” para las elecciones de octubre de 2018, en caso de que Lula da Silva sea inhabilitado.

El programa *Progresista* se aplicó ampliamente en Brasil con los gobiernos del PT, que en la primera década del siglo pasó a ser el modelo de referencia regional. Con desigual penetración, el “progresismo posneoliberal” influye en las acciones de los otros gobiernos de izquierda o centroizquierda, adjetivados como progresistas en el último tiempo.

LA “NUEVA CLASE MEDIA”

Cuando comenzó la segunda década del siglo, el *crecimiento de la clase media* era un dato que se exhibía con orgullo como prueba del éxito de las acciones de *inclusión* para la reducción de la pobreza. Un lustro después se asocia ese crecimiento con la ampliación de la base social y electoral de las fuerzas de derecha. Se hacen correlaciones empíricas e inferencias pero no se conecta el fenómeno con las estrategias bien definidas para dar estabilidad a nuevas fases de la reestructuración capitalista.

La formulación de “clase media emergente” tiene más de 20 años, como se ha visto, pero no se había discutido bajo esos términos. Se le pensaba como “sector informal” y se lo consideraba un *problema*. Si bien no ejercía demandas sobre el Estado pues estaba fuera de las relaciones socio-laborales institucionalizadas, esa misma situación lo hacía difícil de controlar y disciplinar; y su precariedad económico-social presionaba el gasto público en políticas sociales para mantener el orden. Desde el campo crítico se los caracterizó como marginados o excluidos, como la prueba viva de los males del neoliberalismo. La formulación ambigua, sin precisar el tipo de exclusión (que puede ser económica, de derechos sociales, laborales, de derechos políticos, raciales, de género, etaria, cultural, en la *participación* en cualesquiera ámbitos, hasta el familiar), facilitó el cambio de enfoque y discurso sistémico, planteando su “inclusión al mercado” como superación del neoliberalismo, y ya no como problema sino haciendo de su precariedad una virtud: los nuevos emprendedores. Análisis serios cuestionaron que los marginales o excluidos estuvieran “fuera” del mercado, retomando el concepto de masa marginal

de José Nun que mostraba que, aunque eran una sobrepoblación relativa respecto a la acumulación de la empresa monopólica, no estaban fuera del proceso de reproducción del capital, incluso como trabajadores de pequeñas empresas satélites de la gran empresa, y que era necesario incorporarlos a la lucha anticapitalista. Presentados como “emprendedores”, “empresarios innovadores que toman riesgos” –como lo hace Mangabeira en la misma línea en que lo había hecho Hernando de Soto–, se les imbuje de valores capitalistas y conservadores; se les hace creer que son ciudadanos reconocidos cuando el Estado les facilita “activos” –como titularización de bienes inmuebles, capacitación (capital humano), acceso al crédito con inclusión financiera para adquirir privadamente en el mercado los bienes y servicios que requieren (aunque estén endeudados de por vida)–, convencidos de que han elevado su condición social a la “clase media”. Bajo esa individuación satisfecha son despolitizados, ajenos o contrarios a las luchas populares por derechos colectivos y contra el capital, al que consideran su *socio*.

Como decía John Williamson: “[...] la mayor acción contra la pobreza es dar a los pobres activos para que salgan por sí mismos de la pobreza”; éstas son medidas que “a diferencia de las populistas”, producirán “una revolución social sin poner en peligro los intereses de los ricos” (2003:18). Es el modelo *ganar-ganar*.

Por esas fechas el tema de la “nueva clase media” ya aparecía en algunas elaboraciones del Banco Mundial, pero se instaló en la *agenda* latinoamericana desde Brasil. Se monta a partir de un dato: que al promediar la segunda presidencia de Lula da Silva se había logrado sacar a 40 millones de brasileños de la pobreza y que 54% de la población era ya de clase media. Ha sido una operación propagandística mediante el uso de estadísticas, que se ejecuta con apoyo de los empresarios y sus centros “posneoliberales” como la Fundación Getúlio Vargas. El objetivo hacia el exterior era presentar a Brasil como *potencia emergente* no sólo ante los demás países de la región sino también frente a los otros integrantes de los BRICS. La legitimación del *modelo brasileño progresista* abría puertas para la expansión de su capital trasnacional bajo bandera del gobierno petista, hacia los países que empezaban a ser gobernados por la izquierda y el centroizquierda en la región, y también hacia África. Se trataba de convertirlo en el modelo de referencia, en competencia con la influencia de Chávez. Hacia el interior de Brasil, la propaganda sobre la nueva clase media se usa con fines político-electorales para la continuidad del gobierno del PT y sus aliados tras los dos mandatos de Lula da Silva. La candidata Dilma Rousseff la tomó como bandera en el 2010 y la oficializó como objetivo de gobierno desde 2011.

La cabeza visible de la operación es el economista Marcelo Neri, de la Fundación Getúlio Vargas, quien desde 2006 publica varios trabajos que buscan entronizar la

idea de la “inclusión al mercado”. Es muy significativo que, mientras hacia el exterior la propaganda exaltaba la efectividad de los programas de transferencias condicionadas (en particular Bolsa Familia y Fome Zero), en Brasil se decía que el mayor impacto lo había tenido el crecimiento del empleo formal. La lógica apunta a que, al atribuir al sector privado el mayor impulso para el ascenso social, se evitan “tentaciones populistas”. Marcelo Neri no escatimó verborrea para presentar a Brasil como el país de la felicidad, destacando que su país es el número uno en la clasificación de “Felicidad futura” establecida por Gallup, aderezada con frases como ésta: “Brasileño: Profesión Esperanza”. Y sentencia: “Brasil se convirtió en un país de clase media, igual que Estados Unidos”.

En 2010, en plena campaña electoral, Marcelo Neri publica el texto más conocido: *A nova classe média: o lado brilhante dos pobres*. En éste sostiene que la Clase C⁸ es el mayor elector del país, pues entre 2003 y 2009 entraron 30 millones de brasileños a ella, y el de mayor movimiento económico pues tiene 46.24% del poder de compra en 2009, frente al 44.12% de las Clases A y B de mayores ingresos. Los datos ofrecidos por Neri muestran que el *ascenso* es fundamentalmente en consumo de celulares (de 38.57% en 2003 a 81.55% en 2009), de electrónicos (33.90% accede a computadora) y en electrodomésticos (como lavarropas con un crecimiento de 32.61% en el periodo), en su mayoría importados. Pero la mitad de esa clase C carece de drenaje en sus domicilios. La educación promedio (considerando al jefe de familia de más de 25 años) apenas alcanza 7.18 años de escolarización. Sólo accedió a casa propia con financiamiento 4.29%. No obstante, el discurso de Neri es apologético: reclama que no se “mire la foto, sino la película”, que lo que define a la nueva clase media no es “dónde está, sino adónde quiere llegar”, y que “Esta fábrica de sueños individuales es el motor fundamental para la conquista de la riqueza de las naciones. El combustible es el ansia de ascenso ya, el lubricante es el ambiente de trabajo y de negocios” (2010:26). En consonancia con las nuevas estrategias de “inclusión financiera”, contempla en los rubros de medición “el emprendedurismo, el microcrédito y los microseguros”, porque: “Así como el microcrédito permite ascender en la vida, el microseguro impide que estas mismas personas sucumban a choques adversos” (2010:57). Sostiene que, en contraste, las transferencias monetarias condicionadas sólo contribuyeron con 2% en la disminución del número de pobres.

En septiembre de 2012, la presidenta Dilma Rousseff nombró a Marcelo Neri presidente del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPAE (Instituto de Investi-

⁸ La población está estratificada según sus ingresos en cinco “clases”, de la A a la E. La Clase C sería la “nueva clase media”.

gación Económica Aplicada), que está bajo conducción de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia (SAE-PR), sustituyendo a Márcio Porchman del PT. Y el 22 de marzo de 2013 nombró a Neri ministro ejecutivo de la SAE, para ocupar simultáneamente ambos cargos. Su predecesor al frente de la SAE, Moreira Franco (PMDB), nombrado por Dilma Rousseff desde el primer día de su mandato (1 de enero de 2011), creó la Comisión para la Definición de la Clase Media en Brasil.

Los datos estadísticos fueron un campo de propaganda. También de crítica, aunque los escasos trabajos de este tipo no cuestionaron los presupuestos estadísticos en la construcción de los datos.⁹ La SAE adoptó los criterios y mediciones de Marcelo Neri, que toma al *ingreso* como variable fundamental de la definición de “la nueva clase media” (la Clase C). Afirmó que ésta había crecido de 37% en 2003 a 48% en 2009, y que en ese último año tiene ingresos familiares que van desde 1 200 a 5 174 reales (de 576 a 2 487 dólares). En 2012, la SAE estableció que el ingreso per cápita mensual de la Clase C está en el rango de los 291 a 1 019 reales (de 140 a 490 dólares). Contrastado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y pese a que su construcción no da cuenta de las diferencias regionales, el límite inferior de ingresos familiares de la “nueva clase media” cubriría menos de la mitad de una canasta básica en el promedio nacional, lo que sería mucho peor en las regiones más caras.

Tanto desde fuentes oficialistas como de fuentes críticas, se sostiene que las políticas asistencialistas de transferencias monetarias condicionadas gubernamentales han tenido una incidencia mínima en el crecimiento del ingreso de los pobres, aunque difieren en su peso específico entre 2 y 10%. Sus principales programas son Bolsa de Prestación Continua y Bolsa Familia, que sumados transfieren unos 65 dólares. Están dirigidos a familias por debajo de la línea de pobreza. Es significativo que ésta se fija en ingresos per cápita inferiores a 154 reales o 59 dólares mensuales (1.96 al día), y la línea de indigencia en 77 reales mensuales o 26 dólares (0.86 al día), extremadamente bajos, lo que subestima su incidencia. Se considera que mayor impacto han tenido las políticas “universalistas”, como la previsión social para adultos mayores (65 años y más); ésta logra mayor cobertura a partir de la creación de contribuciones individuales. En 2013 hay 24.5 millones de jubilados y pensionados (8.6 millones rurales), con dos tercios de ellos recibiendo mensualmente una pensión equivalente a un salario mínimo. Las contribuciones a la seguridad social aumentaron con la creación de empleos formales

⁹ Sobre los problemas en la construcción de los datos estadísticos, el análisis detallado de cada uno de los programas sociales, así como las fuentes y las referencias bibliográficas de los distintos trabajos de validación o crítica, véase Stollowicz (2016:861-902).

en 2003-2013, que fue exhibida como el mayor logro del neodesarrollo: se crearon aproximadamente 21 millones, pero 84% de esos nuevos empleos está en la franja de hasta dos salarios mínimos. En 2013, el salario mínimo es de 678 reales (313 dólares), equivalente a 17% de la canasta básica en ese año, que para distintos autores está próximo a la miseria. Para 2013, la moda (el rango más numeroso) del ingreso per cápita mensual en las familias es de 594.50 reales (unos 275 dólares).

El salario mínimo real creció entre 50 y 70% en el decenio 2003-2013 según distintos autores (muestra la sumergida cima de la que se partió); pero se estima que las ventas al por menor se duplicaron entre 2003 y 2014. Esto indica que el aumento del consumo que produce tanta felicidad fue financiado con fuerte endeudamiento de las familias, sobre todo las más pobres: en 2006 comprometía 22% de los ingresos familiares; a comienzos de 2015 compromete 48% de sus ingresos con una tasa media de interés de 43%. No obstante, se asumía como la conquista de la *ciudadanía de primera*, como lo destacó el propio Lula da Silva (Stolowicz, 2016:886).

Ingresos de las familias pobres que ya están castigados por el sistema impositivo regresivo con impuestos indirectos, que se aplican a todos los rubros de la canasta básica; aproximadamente 56% de los beneficios recibidos por Bolsa Familia retornan a las arcas del Estado en forma de impuestos. Mientras que, al mismo tiempo, se hacen rebajas impositivas a los sectores de altos ingresos en gastos privados de salud y educación: las deducciones tributarias del gasto privado en salud fueron en 2012 de 18.3 mil millones de reales (8 840 millones de dólares), que favoreció 77% a las personas físicas de mayores ingresos. Lo que el Estado dejó de recaudar equivale a 22% del presupuesto del Ministerio de Salud en ese año, cuyos servicios están bastante afectados, induciendo a los pobres a contratar seguros para la salud privada. Algo similar ocurre con la educación (aparte de las becas Prouni que otorga focalizadamente el gobierno a jóvenes pobres para ingresar a universidades privadas). Según el IPEA (2012, cuando estaba dirigido por Márcio Porchman), para los que ganan hasta dos salarios mínimos la carga tributaria es de 50%, y para los que ganan más de 30 salarios es de 25 por ciento.

Al mismo tiempo, se hicieron masivas rebajas impositivas a las empresas a partir de 2011; sólo en 2014 fueron de 25 mil millones de reales (10 638 millones de dólares), a 56 sectores con una facturación bruta anual en el mercado interno de 1 900 millones de reales (808 millones de dólares), que en total corresponden al 50% del PIB antes de impuestos. En contraste, el gasto público en los programas asistenciales es de 1.2% del PIB, y el gasto en prestaciones previsionales es de 7.38% del PIB. Financiados, mayormente, por los trabajadores y los consumidores pobres.

Ya afuera del IPEA, el petista Márcio Porchman fue una de las pocas voces que cuestionaban el deslumbramiento con los ditirambos de Neri, sobre todo por sus consecuencias políticas. Decía en 2012:

Estamos observando una despolitización en este ascenso social en el país [y] este sector posiblemente liderará el proceso político brasileño [...] sea por la derecha o por la izquierda [...] este avance social no se traduce en aumento de afiliaciones a los sindicatos, a las asociaciones de barrio ni a los partidos políticos [...] Cerca de un millón de jóvenes ingresaron a las universidades a través de Prouni, pero eso no se ve traducido en el reforzamiento del movimiento estudiantil.

Y advertía que calificar el “ascenso social” [de los pobres vía el consumismo, que no cuestionaba] como clase media, justificaba que el Estado subsidiara servicios privados en lugar de promover los intereses de los trabajadores que son “los bienes públicos de interés colectivo: salud pública, educación pública, transporte público”.

También Mangabeira cuestionó a Neri, pero por razones políticas completamente distintas. El sociólogo Jessé de Souza, estrechamente vinculado con Mangabeira, criticó que se caracterizara a la “nueva clase media” sólo por el ingreso. En 2009 coordinó el libro *A ralé brasileira: quem é e como vive*, y en 2010 publicó *Os batalhadores brasileiros. Nova classe média ou nova classe trabalhadora?* con prólogo de Mangabeira Unger. De Souza cuestiona el “economicismo” de Neri que sólo considera las variables económicas y desconoce las determinantes culturales y familiares en el ascenso social. Le cuestiona, asimismo, su mirada indiferenciada sobre los “pobres”, ante lo cual de Souza distingue en la base de la pirámide social a la “ralé” (plebe) y a los “batalhadores” (luchadores). Ambos son precarizados socialmente, pero los *batalhadores* tienen posibilidades de ascenso social y están entre los *ralé* y la clase media tradicional o “verdadera”. En lugar de centrarse en la ampliación de ingresos, enfatiza en la necesidad de políticas para producir esos cambios culturales y conductuales entre los pobres para que accedan *por sí mismos* a la “Clase C”. Y con Mangabeira destacan el positivo papel que desempeña en esa dirección la teología de la prosperidad de las (ultraconservadoras y poderosas) iglesias evangélicas. Concluye Jessé de Souza:

La revolución brasileña, hoy, sería que el Estado use sus recursos y sus poderes para permitir a la mayoría del pueblo brasileño seguir el camino de esa vanguardia de emergentes. [Con las] tareas principales de ampliación del acceso al crédito, a la tecnología, al conocimiento y a las prácticas productivas vanguardistas, tanto como la difusión de experiencias locales exitosas [mediante] la asociación entre lo público y lo privado (2010:9).

Esto resultará conveniente desde 2013, en la crisis por descenso de los precios de exportación, a la que los empresarios responden con desempleo, exigiendo reducciones salariales y mayores exenciones fiscales. En febrero de 2015, Mangabeira, al frente nuevamente de la SAE designa a Jessé de Souza para dirigir el IPAE sustituyendo a Marcelo Neri, que sale de ambos cargos.

Entre el saliente y el entrante no hay contradicciones de fondo en su objetivo de modernización capitalista. Jessé de Souza concibe la “inclusión” como *modernización* de los *atrasados*, su integración subordinada a las pautas impuestas por el capital para la acumulación. Se inscribe en la concepción modernizadora del demócratacristiano Roger Vekemans de la década de 1960. Ni siquiera se asemeja a la lógica culturalista de Gino Germani, que entendía la modernización como incorporación al ejercicio de derechos colectivos (y obligaciones), y que pensaba la integración a un capitalismo muy distinto del actual, el de los “años dorados”. En tanto que de Souza piensa la modernización como la integración individual (de cada miembro de la “clase” marginada o *ralé*) al mercado capitalista para que puedan ser “productores útiles”, “competitivos”. También Marcelo Neri piensa la “inclusión” como modernización capitalista, pero la concibe en los términos de Rostow, para quien la “etapa superior” es “la era del consumo de masas”. Por eso Neri equipara a Brasil con Estados Unidos. Pero la *inclusión al mercado como consumidores* de Neri supone una inversión de las “etapas” de Rostow: para éste, el consumo de masas (“la soberanía del consumidor”) corresponde a la etapa de “madurez”, el punto de llegada de una larga ruta de modernización industrializadora después de haber cumplido las “precondiciones” y el “despegue” (*take off*); mientras que la de Neri se realiza en economías altamente dependientes del extractivismo y la monoproducción primaria, con consumo de productos importados (de otras economías “maduras”) y con un consumidor encadenado a deudas, no precisamente “soberano”.

Las importantes movilizaciones callejeras de junio de 2013 dieron la razón a Porchmann en dos sentidos: porque exigieron mejorar los servicios públicos; y porque como *llamarada de petate* se disolvieron y fueron desplazadas –o absorbidas– por las masivas acciones callejeras promovidas por la derecha desde 2015 para echar abajo al gobierno de Dilma Rousseff. Tampoco la Central Única de Trabajadores pudo convocar a una movilización suficientemente amplia en defensa del gobierno como para contrarrestarlas. Su debilitamiento tras haber sido integrada a la estrategia “progresista” merece un análisis exhaustivo.

Tanto en Brasil como en otros países, desde los gobiernos progresistas se culpabiliza a la “clase media” del avance del conservadurismo político. Sin una mínima autocrítica por los costos ideológicos y políticos de haber emprendido una modernización capitalista que por sí misma aumenta la fuerza del capital, también en el plano político.

No obstante, debe decirse que es una modernización híbrida que, en grados diferentes según los países, incorpora tanto la integración a las lógicas actuales de la reproducción capitalista, como el ejercicio de derechos colectivos y otras mediaciones.

La profundidad y extensión de la crisis, que puede hacer mermar las ganancias del capital, es respondida por éste con acciones de demolición de aquellos obstáculos, para lo cual tiene que recuperar el manejo directo del aparato estatal.

El talante golpista con que la derecha busca imponer las acciones de demolición, violando la institucionalidad que le facilitó iniciar la estabilización de la reestructuración capitalista —y que parece restaurar el escenario que se vivía a mediados de la década de 1980—, tiene como propósito inducir a consensos aún más moderados que prioricen el orden democrático-representativo sobre cualquier intento de hacer retroceder el poderío económico y social ganado por el capital en estas décadas. Pero tendrán que estabilizar.

¿FRACASO O ÉXITO PROGRESISTA?

El análisis de la coyuntura cambia cuando se tiene presente que la “alternativa progresista” es una estrategia de los dominantes para fortalecer el poder del capital y sus ganancias neutralizando rechazos, y para construir un nuevo sentido común de complacencia o adhesión hacia él y a las fuerzas políticas que lo representan. En este sentido deben reconocerse sus éxitos, logrados con creatividad táctica y retórica, cuya eficacia es inversamente proporcional a la del autodenominado pensamiento crítico.

Una medida del éxito del “progresismo” es la crisis identitaria, ideológica y política de la izquierda, lo que sin duda ocurre en grados distintos por países, pero es una tendencia regional común. Sus efectos no serán de corto plazo. Pero los éxitos de este capitalismo destructor de la humanidad y su hogar vital están generando contradicciones inéditas, de modo que la idea de “ciclo” no permite avizorar las respuestas que incluso el instinto de conservación puede desencadenar.

Lo que debería aprenderse de este tiempo largo es que los dominantes buscarán nuevos mecanismos de estabilización. No debe subestimarse su creatividad. Lo decisivo es reconocerlos a tiempo y no caer en sus trampas. En ello los intelectuales tienen inmensas responsabilidades. Quizá los dolorosos aprendizajes de esta época potencien la reconstrucción de las fuerzas colectivas que se necesitan para enfrentarlo.

BIBLIOGRAFÍA

- Consenso de Buenos Aires (1997). “Alternativa Latinoamericana. Un nuevo camino después del neoliberalismo”, *Página/12*, Separata, Buenos Aires, 2 de diciembre.
- Correa, Enrique (1996). *El Mercurio Internacional*, Santiago de Chile, 30 de mayo al 5 de junio, p. 4.
- De Souza, Jessé (2010). *Os batalhadores brasileiros. Nova classe média ou nova classe trabalhadora?* São Paulo: Editora UFMG.
- *et al.* (2009). *A ralé brasileira: quem é e como vive*. Belo Horizonte: Universidad Federal de Minas Gerais.
- Mangabeira Unger, Roberto (1994). “3 de outubro e o Futuro do PT (escrito em 30 de novembro de 1994)”, *Teoria e Debate*. São Paulo: Partido dos Trabalhadores.
- Neri, Marcelo (coord.) (2010). *A nova classe média: o lado brilhante dos pobres*. São Paulo: Centro de Políticas Sociais/Fundação Getúlio Vargas.
- Nun, José (2001). *Marginalidad y exclusión social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Porchmann, Márcio (2012). “Ascensão da classe trabalhadora dá sinais de Esgotamento”. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.
- Salinas de Gortari, Carlos y Roberto Mangabeira Unger (1999). “The Market Turn Without Neoliberalism”, *Challenge*, vol. 42 núm. 1, enero-febrero, Armonk, Nueva York: M.E. Sharpe Inc., pp. 14-33.
- (1999). “Hacia un mercado sin neoliberalismo”, *Reforma*, México, 20 y 21 de enero.
- Stolowicz, Beatriz (2012). *A contracorriente de la hegemonía conservadora*. México: Espacio Crítico Ediciones/UAM-Xochimilco/Ítaca.
- (2016). *El misterio del posneoliberalismo*, tomo II, *La estrategia para América Latina*. Bogotá: ILSA/Espacio Crítico Editores.
- Williamson, John (2003). *After the Washington Consensus*. Washington: Institute for International Economics.